



Medellín, jueves 9 de octubre de 2014

INGaceta

DEPARTAMENTAL



N° 20.162

Registrando la historia de Antioquia desde 1908

56 Páginas

Registrado en el Ministerio de Gobierno por Resolución N° 000474 de junio de 1967 | Tarifa postal reducida N° 2333 de la Administración Postal Nacional - Porte Pagado

RESUMARIO

RESOLUCIONES



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Secretaría General
Dirección de Imprenta
Sergio Arroyave Maya
Director

SUMARIO RESOLUCIONES OCTUBRE 2014

Número	Fecha	Página	Número	Fecha	Página
126773	Octubre 02 de 2014	3	126794	Octubre 02 de 2014	30
126775	Octubre 02 de 2014	8	126795	Octubre 02 de 2014	35
126781	Octubre 02 de 2014	14	126796	Octubre 02 de 2014	40
126792	Octubre 02 de 2014	20	126797	Octubre 02 de 2014	46
126793	Octubre 02 de 2014	25	126798	Octubre 02 de 2014	51

RESOLUCION NUMERO 126773

: 02/10/2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO A LA FUNDACIÓN EGIDA

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la República en los Decretos Nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995, 0427 de 1996, y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

El Gobernador de Antioquia ejerce la facultad de Inspección y Vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, por delegación del Presidente de la República mediante la Ley 22 de 1987 modificada por la 489 de 1998 y el Decreto Ley 019 de 2012 y reglamentada mediante los decretos nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995 y 0427 de 1996.

II. ANTECEDENTES FÁCTICOS

1. Que por Acta de Constitución de 26 de febrero de 2002 otorgada por la Asamblea Constitutiva, inscrita en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur el 4 de marzo de 2002 en el Libro I bajo el número 00002235, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN EGIDA, la cual se identifica con el NIT 811.033.85-1 y su domicilio es el municipio de Itagüí – Antioquia.
2. Dentro del Plan de Inspección para el año 2009, uno de los programas que trazó la Dirección de Asesoría Legal y de Control fue el de velar por que las Entidades sin Ánimo de Lucro -ESAL- cumplieran con las normas legales Decreto 054 de 1974, Decreto 0427 de 1996, Decreto 1318 de 1988, Decreto 1093 de 1989, Decreto 2649 de 1993, Ley 190 de 1995 y Ley, 222 de 1995.
3. La Dirección de Asesoría Legal y de Control requirió a la Fundación mediante comunicado del 13 de noviembre de 2009 con radicado 325844 para que aportara la siguiente documentación en un plazo no superior a quince (15) días:

- a. Prueba de existencia y representación legal (Certificado de Cámara de Comercio).
 - b. Estatutos actualizados
 - c. Inscripción de libros oficiales administrativos (Actas de Asamblea, Actas de Junta Directiva y Libro de Socios)
 - d. Proyecto de presupuesto de 2009
 - e. Estados Financieros a diciembre de 2008 certificados y/o dictaminados. Anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público
 - f. Acta mediante la cual se aprobaron los estados financieros y el proyecto de presupuesto. (Fiel copia del libro de actas registrado).
4. Mediante Auto N° 4056 del 10 de diciembre de 2009 se ordenó el Inicio de la Investigación a la FUNDACIÓN EGIDA con el fin de verificar el correcto funcionamiento y el cabal cumplimiento de la normatividad que la regula.
 5. Se citó a la representante legal de la Fundación mediante comunicado del 17 de diciembre de 2009 para que se presentara en la Dirección de Asesoría Legal y de Control dentro de los cinco (5) días siguiente al recibo de la comunicación para efectos de la notificación del Auto 4056 del 10 de diciembre de 2009.
 6. Pese al requerimiento no se pudo efectuar la diligencia de notificación personal.
 7. De acuerdo con la normatividad vigente para la fecha, el Auto de Inicio de Investigación se notificó mediante la fijación de un edicto que se surtió entre el 9 al 24 de septiembre de 2010.
 8. Con fines que obra como prueba en el expediente, La Directora de Asesoría Legal y de Control el 23 de octubre de 2013 realiza un certificado en el cual se consigna lo siguiente:

“La Directora de Asesoría legal y de Control de la Gobernación de Antioquia hace constar que el expediente del proceso identificado con IVC N° 501174 contra la FUNDACIÓN EGIDA, identificada con NIT 811.033.085-1, fue encontrado en la estantería donde reposa información de cumplimiento de normatividad en el archivo de gestión de la Dirección de Asesoría Legal.

Verificado el expediente se encuentra la siguiente situación:

- 1. El proceso fue sustanciado por Jorge Iván Restrepo López, quienes ya no labora en la Dirección Por su deceso ocurrido el 22 de octubre de 2013.*
 - 2. No se encontraba reportado en la base de datos de la Dirección.*
 - 3. El inicio del proceso fue el 13 de noviembre de 2009 mediante requerimiento.*
 - 4. La facultad sancionatoria para la administración Departamental venció el 13 de noviembre de 2012.*
 - 5. A la fecha de encontrarse el expediente y dada la etapa procesal en que se encontró, cuya última actuación fue notificación por edicto del Auto de Inicio de Investigación, fijado entre 9 al 24 de septiembre de 2010 no es posible gestionar trámite alguno, pues por términos no sería posible garantizar un debido proceso”*
9. Que como se puede apreciar de la lectura del acervo probatorio en el expediente ha transcurrido más de tres (3) años, desde que la administración asumió el conocimiento de la investigación y en la cual no se dictó acto administrativo de carácter sancionatorio y por lo tanto se perdió dicha facultad.

III. ANÁLISIS JURÍDICO Y PROBATORIO DE LO ACTUADO

Teniendo en cuenta que le inicio del procedimiento administrativo sancionatorio ocurrió antes del 12 de julio de 2012, fecha en la que entró en vigencia la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el presente proceso se debe seguir rituando conforme al Decreto 01 de 1984 o conocido como “Código de Procedimiento Administrativo”.

En dicha disposición legal se ha expresado de manera clara el plazo en las cuales las entidades públicas pueden dictar los actos administrativos de carácter sancionatorio. Disposición que se encuentra en el artículo 39 que reza:

“Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.

La caducidad como institución jurídica tiene reconocimiento como garantía constitucional que se desprende del Debido Proceso que se consagra en el artículo 29 de la

Constitucional Política en sentido que el *Ius Puniendi* que tiene la administración no es absoluta y por lo tanto tiene determinados límites materiales y temporales.

En cuanto a los límites materiales se deben circunscribir a la realización de determinadas conductas que el mismo ordenamiento jurídico ha considerado que transgreden un determinado bien jurídicamente tutelable. Y en cuanto a los límites temporales hacen referencia al lapso en el cual el aparato sancionador debe actuar y garantizando un debido proceso puede imponer las sanciones que se establece por haber transgredido determinadas norma, límite que tiene como finalidad para contrarrestar la incertidumbre que tiene el administrado en la forma que finalizará el proceso que se lleva en su contra.

Que dentro del contexto de las investigaciones administrativas la caducidad ha sido definida por el H. Consejo de Estado en Sentencias del 14 de julio de 1995, expediente 5098 MP. Doctor Álvaro Lecompte Luna; y Sentencia del 2 de abril de 1998, Sección Primera expediente 4438, MP: Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en los siguientes términos:

"...Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de las consideraciones que no sean solo el transcurso de tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable..."

Que dicho Cuerpo Colegiado en sentencia del 15 de marzo de 2001, MP. María Elena Giraldo Gómez, ha reiterado lo siguiente:

"La caducidad de la acción administrativa es consecuencia del vencimiento del plazo legal fijado a la Administración para investigar cuando se presenta un hecho que pueda ocasionarla".

Y agrega que:

"La caducidad administrativa, se produce en la sede administrativa y se traduce, en lo que respecta a la misma administración, en la pérdida de competencia temporal".

En este orden de ideas, el Departamento de Antioquia ha perdido la competencia temporal para dictar resolución alguna de carácter sancionatorio y deberá proferir el acto

correspondiente así lo declare en desarrollo de los principios legales de legalidad, igualdad, celeridad y economía procesal que desarrollan el debido proceso.

Ahora bien, se deberá declarar de manera oficiosa la caducidad en desarrollo de la garantía del debido proceso y en desarrollo de los principios de legalidad, celeridad, economía y eficacia de los procedimientos administrativos. Declaratoria que ya había sido estudiada y avalada por el Consejo de Estado en concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de 25 de mayo de 2005 con radicado 1632 y siendo el Magistrado Ponente el Dr. ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO en los siguientes términos:

“Siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual, el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda que su declaración procede de oficio. No tendría sentido que, si en un caso específico, la administración advierte que ha operado el fenómeno de la caducidad, no pudiese declararla de oficio, y a sabiendas continúe con la actuación que finalmente, culminará en un acto viciado de nulidad por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite”.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad administrativa en la actuación adelantada contra la FUNDACIÓN EGIDA, Entidad Sin Ánimo de Lucro, que se constituyó por Acta de 26 de febrero de 2002 otorgada por la Asamblea Constitutiva, inscrita en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur el 4 de marzo de 2002 en el Libro I bajo el número 00002235, la cual se identifica con el NIT 811.033.85-1 y tiene como domicilio el municipio de Itagüí – Antioquia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la representante legal de la Fundación, la señora HAYDEE BERMEO DUQUE, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 51.693.867, o por quien legalmente haga sus veces, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior y en procedimiento diferente, se insta a la Dirección de Asesoría Legal y Control para que de oficio y en ejercicio de su competencia, inicie el procedimiento que corresponda, a fin de establecer el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la FUNDACIÓN EGIDA por lo hechos que no han sido objeto de investigación en el expediente que con el presente acto administrativo se declara su caducidad.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición el cual debe ser interpuesto ante el Gobernador del Departamento de Antioquia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE


 **SERGIO FAJARDO VALDERRAMA**
Gobernador de Antioquia


ERIKA TATIANA SÁNCHEZ GÓMEZ
Directora Asesoría Legal y de Control

RESOLUCION NUMERO 126775

02/10/2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO A FUNDACIÓN BIENESTAR ANIMAL

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la República en los Decretos Nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995, 0427 de 1996, y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

El Gobernador de Antioquia ejerce la facultad de Inspección y Vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, por delegación del Presidente de la República mediante la Ley 22 de 1987 modificada por la 489 de 1998 y el Decreto Ley 019 de 2012 y reglamentada mediante los decretos nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995 y 0427 de 1996.

II. ANTECEDENTES FÁCTICOS

1. Que por Acta de Constitución del 27 de mayo de 2005, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 6 de abril de 2006 en el Libro 1 bajo el número 898, se constituyó una entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN BIENESTAR ANIMAL, la cual se identifica con el NIT 900.078.738-7 y domicilio en el municipio de Medellín.
2. Dentro del Plan de Inspección para el año 2009, uno de los programas que trazó la Dirección de Asesoría Legal y de Control fue el de velar por que las Entidades sin Animo de Lucro-ESAL- cumplieran con las normas legales Decreto 054 de 1974, Decreto 0427 de 1996, Decreto 1318 de 1988, Decreto 1093 de 1989, Decreto 2649 de 1993, Ley 190 de 1995 y Ley, 222 de 1995.
3. El 26 de octubre de 2009, mediante comunicado con radicado 306752 se requirió a la FUNDACIÓN BIENESTAR ANIMAL para que presente la siguiente información en un plazo de quince (15) días:
 - a. Prueba de existencia y representación legal (certificado de Cámara de Comercio).
 - b. Estatutos actualizados
 - c. Inscripción de libros oficiales administrativos (Actas de Asamblea, Actas de Junta Directiva y Libro de Socios)
 - d. Proyecto de presupuesto de 2009
 - e. Estados Financieros a diciembre de 2008 certificados y/o dictaminados. Anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público
 - f. Acta mediante la cual se aprobaron los estados financieros y el proyecto de presupuesto. (Fiel copia del libro de actas registrado).

4. Mediante comunicado del 4 de diciembre de 2009 con radicado 347444 el representante legal de la Fundación da respuesta al requerimiento y en el que entrega la siguiente documentación:
 - a. Certificado de Existencia y Representación Legal
 - b. Copia de la Inscripción de libros
 - c. Estados Financieros
 - d. Certificado de los estados financieros suscrito por la contadora pública que los elaboró
 - e. Copia de la tarjeta profesional de la contadora pública
5. Mediante Auto N° 4050 del 4 de diciembre de 2009 se ordenó el Inicio de la Investigación a la FUNDACIÓN BIENESTAR ANIMAL por no haber dado respuesta al requerimiento que se ha descrito en los numerales anteriores.
6. Se citó al representante legal de la Fundación para que se presentara a la sede de la Dirección de Asesoría Legal y de Control para practicar la diligencia de notificación personal del Auto de Inicio mediante comunicado con radicado 358577 del 17 de diciembre de 2009.
7. El Auto de Inicio de Investigación fue notificado personalmente al representante legal de la Fundación el 3 de marzo de 2010, conforme a la diligencia que obra en el expediente.
8. La Fundación por intermedio de su representante legal en comunicado con radicado 201000270023 del 1 de octubre de 2010 allega la siguiente información:
 - a. Estados Financieros con corte a diciembre de 2009
 - b. Fotocopia de la Tarjeta profesional de la Contadora Pública que los elaboró
 - c. Copia del Acta de Aprobación de los estados financieros
9. Con fines que obra como prueba en el expediente, La Directora de Asesoría Legal y de Control el 23 de octubre de 2013 realiza un certificado en el cual se consigna lo siguiente:

“La Directora de Asesoría legal y de Control de la Gobernación de Antioquia hace constar que el expediente del proceso identificado con IVC N° VC501181 contra la FUNDACIÓN BINESTAR ANIMAL, identificada con NIT 900.078.738-7, fue

encontrado en la estantería donde reposa información de cumplimiento de normatividad en el archivo de gestión de la Dirección de Asesoría Legal.

Verificado el expediente se encuentra la siguiente situación:

- 1. El proceso fue sustanciado por Jorge Iván Restrepo López, quien ya no labora en la Dirección, por su deceso ocurrido el 22 de octubre de 2013.*
 - 2. No se encontraba reportado en la base de datos de la Dirección.*
 - 3. El inicio del proceso fue el 26 de octubre de 2009, mediante requerimiento.*
 - 4. Se profirió auto de inicio de investigación el 4 de diciembre de 2009. La facultad sancionatoria para la administración Departamental venció el 4 de diciembre de 2012.*
 - 5. A la fecha de encontrarse el proceso y dada la etapa procesal en que se encontró que la última actuación que reposa en el expediente es diligencia de notificación personal del representante legal el 3 de marzo de 2010 no es posible gestionar trámite alguno, pues por términos no sería posible garantizar un debido proceso.”*
10. Que como se puede apreciar de la lectura del acervo probatorio en el expediente ha transcurrido más de tres (3) años, desde que la administración asumió el conocimiento de la investigación y en la cual no se dictó acto administrativo de carácter sancionatorio y por lo tanto se perdió dicha facultad.

III. ANÁLISIS JURÍDICO Y PROBATORIO DE LO ACTUADO

Teniendo en cuenta que le inicio del procedimiento administrativo sancionatorio ocurrió antes del 12 de julio de 2012, fecha en la que entró en vigencia la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el presente proceso se debe seguir rituando conforme al Decreto 01 de 1984 o conocido como “Código de Procedimiento Administrativo”.

En dicha disposición legal se ha expresado de manera clara el plazo en las cuales las entidades públicas pueden dictar los actos administrativos de carácter sancionatorio. Disposición que se encuentra en el artículo 39 que reza:

“Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.

La caducidad como institución jurídica tiene reconocimiento como garantía constitucional que se desprende del Debido Proceso que se consagra en el artículo 29 de la Constitución Política en sentido que el *Ius Puniendi* que tiene la administración no es absoluta y por lo tanto tiene determinados límites materiales y temporales.

En cuanto a los límites materiales se deben circunscribir a la realización de determinadas conductas que el mismo ordenamiento jurídico ha considerado que transgreden un determinado bien jurídicamente tutelable. Y en cuanto a los límites temporales hacen referencia al lapso en el cual el aparato sancionador debe actuar y garantizando un debido proceso puede imponer las sanciones que se establece por haber transgredido determinadas norma, límite que tiene como finalidad para contrarrestar la incertidumbre que tiene el administrado en la forma que finalizará el proceso que se lleva en su contra.

Que dentro del contexto de las investigaciones administrativas la caducidad ha sido definida por el H. Consejo de Estado en Sentencias del 14 de julio de 1995, expediente 5098 MP. Doctor Álvaro Lecompte Luna; y Sentencia del 2 de abril de 1998, Sección Primera expediente 4438, MP: Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en los siguientes términos:

"...Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de las consideraciones que no sean solo el transcurso de tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable...".

Que dicho Cuerpo Colegiado en sentencia del 15 de marzo de 2001, MP. María Elena Giraldo Gómez, ha reiterado lo siguiente:

"La caducidad de la acción administrativa es consecuencia del vencimiento del plazo legal fijado a la Administración para investigar cuando se presenta un hecho que pueda ocasionarla".

Y agrega que:

"La caducidad administrativa, se produce en la sede administrativa y se traduce, en lo que respecta a la misma administración, en la pérdida de competencia temporal".

En este orden de ideas, el Departamento de Antioquia ha perdido la competencia temporal para dictar resolución alguna de carácter sancionatorio y deberá proferir el acto correspondiente así lo declare en desarrollo de los principios legales de legalidad, igualdad, celeridad y economía procesal que desarrollan el debido proceso.

Ahora bien, se deberá declarar de manera oficiosa la caducidad en desarrollo de la garantía del debido proceso y en desarrollo de los principios de legalidad, celeridad, economía y eficacia de los procedimientos administrativos. Declaratoria que ya había sido estudiada y avalada por el Consejo de Estado en concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de 25 de mayo de 2005 con radicado 1632 y siendo el Magistrado Ponente el Dr. ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO en los siguientes términos:

“Siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual, el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda que su declaración procede de oficio. No tendría sentido que, si en un caso específico, la administración advierte que ha operado el fenómeno de la caducidad, no pudiese declararla de oficio. y a sabiendas continúe con la actuación que finalmente, culminará en un acto viciado de nulidad por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad administrativa en la actuación adelantada contra la **FUNDACIÓN BIENESTAR ANIMAL**, entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de Medellín - Antioquia, que se constituyó por acta de 27 de mayo de 2005, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 6 de abril de 2006 en el Libro 1 bajo el número 898 y se identifica con el NIT 900.078.738-7.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la representante legal de la Fundación, el señor TOMAS FELIPE TINTINAGO VASQUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 71.762.855 o por quien legalmente haga sus veces, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior y en procedimiento diferente, se insta a la Dirección de Asesoría Legal y Control para que de oficio y en ejercicio de su competencia, inicie el procedimiento que corresponda, a fin de establecer el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la **FUNDACIÓN BIENESTAR ANIMAL** por lo hechos que no han sido objeto de investigación en el expediente que con el presente acto administrativo se declara su caducidad.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición el cual debe ser interpuesto ante el Gobernador del Departamento de Antioquia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE


SERGIO FAJARDO VALDERRAMA
Gobernador de Antioquia


ERIKA TATIANA SÁNCHEZ GÓMEZ
Directora Asesoría Legal y de Control

RESOLUCION NUMERO 126781

02/10/2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO A LA FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL COLOMBIA DANZA

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la República en los Decretos Nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995, 0427 de 1996, y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

El Gobernador de Antioquia ejerce la facultad de Inspección y Vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, por delegación del Presidente de la República mediante la Ley 22 de 1987 modificada por la 489 de 1998 y el Decreto Ley 019 de 2012 y reglamentada mediante los decretos nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995 y 0427 de 1996.

II. ANTECEDENTES FÁCTICOS

1. Que por Acta de Constitución No. 001 de 2 de diciembre de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 24 de diciembre de 2003 en el Libro 1 bajo el número 4419, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL COLOMBIA DANZA, la cual se identifica con el NIT 811.042.686-4 y su domicilio es el Municipio de Bello – Antioquia.
2. Dentro del Plan de Inspección para el año 2009, uno de los programas que trazó la Dirección de Asesoría Legal y de Control fue el de velar por que las Entidades sin Ánimo de Lucro -ESAL- cumplieran con las normas legales Decreto 054 de 1974, Decreto 0427 de 1996, Decreto 1318 de 1988, Decreto 1093 de 1989, Decreto 2649 de 1993, Ley 190 de 1995 y Ley, 222 de 1995.
3. El 26 de octubre de 2009, mediante comunicado con radicado 306755 se requirió a la FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL COLOMBIA DANZA para que presente la siguiente información en un plazo de quince (15) días:
 - a. Prueba de existencia y representación legal (Certificado de Cámara de Comercio).
 - b. Estatutos actualizados
 - c. Inscripción de libros oficiales administrativos (Actas de Asamblea, Actas de Junta Directiva y Libro de Socios)
 - d. Proyecto de presupuesto de 2009
 - e. Estados Financieros a diciembre de 2008 certificados y/o dictaminados. Anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público
 - f. Acta mediante la cual se aprobaron los estados financieros y el proyecto de presupuesto. (Fiel copia del libro de actas registrado).

4. Mediante Auto N° 4045 del 4 de diciembre de 2009 se ordenó el Inicio de la Investigación a la FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL COLOMBIA DANZA por no haber dado respuesta al requerimiento que se ha descrito en los numerales anteriores.
5. Con fines que obra como prueba en el expediente, La Directora de Asesoría Legal y de Control el 23 de octubre de 2013 realiza un certificado en el cual se consigna lo siguiente:

“La Directora de Asesoría legal y de Control de la Gobernación de Antioquia hace constar que el expediente del proceso identificado con IVC N° 0145-12 contra la FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL COLOMBIA DANZA, identificada con NIT 811.042.686-4, fue encontrado en la estantería donde reposa información de cumplimiento de normatividad en el archivo de gestión de la Dirección de Asesoría Legal.

Verificado el expediente se encuentra la siguiente situación:

- 1. El proceso fue sustanciado por Jorge Iván Restrepo López, quien ya no labora en la Dirección, por su deceso ocurrido el 22 de octubre de 2013.*
 - 2. El inicio del proceso fue el 26 de octubre de 2009, mediante requerimiento.*
 - 3. Se profirió auto de inicio de investigación el 4 de diciembre de 2009. La facultad sancionatoria para la administración Departamental venció el 4 de diciembre de 2012.*
 - 4. A la fecha de encontrarse del proceso y dada la etapa procesal en que se encontró que la última actuación que reposa en el expediente es el auto de inicio de investigación no es posible gestionar trámite alguno, pues por términos no sería posible garantizar un debido proceso.”*
6. El Auto de Inicio de Inicio de Investigación no fue notificado al Representante Legal de la Fundación.
 7. Que como se puede apreciar de la lectura del acervo probatorio en el expediente ha transcurrido más de tres (3) años, desde que la administración asumió el conocimiento de la investigación y en la cual no se dictó acto administrativo de carácter sancionatorio y por lo tanto se perdió dicha facultad.

III. ANÁLISIS JURÍDICO Y PROBATORIO DE LO ACTUADO

Teniendo en cuenta que le inicio del procedimiento administrativo sancionatorio ocurrió antes del 12 de julio de 2012, fecha en la que entró en vigencia la Ley 1437 de 2011

(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el presente proceso se debe seguir rituando conforme al Decreto 01 de 1984 o conocido como "Código de Procedimiento Administrativo".

En dicha disposición legal se ha expresado de manera clara el plazo en las cuales las entidades públicas pueden dictar los actos administrativos de carácter sancionatorio Disposición que se encuentra en el artículo 39 que reza:

"Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas".

La caducidad como institución jurídica tiene reconocimiento como garantía constitucional que se desprende del Debido Proceso que se consagra en el artículo 29 de la Constitución Política en sentido que el *Ius Puniendi* que tiene la administración no es absoluta y por lo tanto tiene determinados límites materiales y temporales.

En cuanto a los límites materiales se deben circunscribir a la realización de determinadas conductas que el mismo ordenamiento jurídico ha considerado que transgreden un determinado bien jurídicamente tutelable. Y en cuanto a los límites temporales hacen referencia al lapso en el cual el aparato sancionador debe actuar y garantizando un debido proceso puede imponer las sanciones que se establece por haber transgredido determinadas norma, límite que tiene como finalidad para contrarrestar la incertidumbre que tiene el administrado en la forma que finalizará el proceso que se lleva en su contra.

Que dentro del contexto de las investigaciones administrativas la caducidad ha sido definida por el H. Consejo de Estado en Sentencias del 14 de julio de 1995, expediente 5098 MP. Doctor Álvaro Lecompte Luna; y Sentencia del 2 de abril de 1998, Sección Primera expediente 4438, MP: Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en los siguientes términos:

"...Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de las consideraciones que no sean solo el transcurso de tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable...".

Que dicho Cuerpo Colegiado en sentencia del 15 de marzo de 2001, MP. María Elena Giraldo Gómez, ha reiterado lo siguiente:

“La caducidad de la acción administrativa es consecuencia del vencimiento del plazo legal fijado a la Administración para investigar cuando se presenta un hecho que pueda ocasionarla”.

Y agrega que:

“La caducidad administrativa, se produce en la sede administrativa y se traduce, en lo que respecta a la misma administración, en la pérdida de competencia temporal”.

En este orden de ideas, el Departamento de Antioquia ha perdido la competencia temporal para dictar resolución alguna de carácter sancionatorio y deberá proferir el acto correspondiente así lo declare en desarrollo de los principios legales de legalidad, igualdad, celeridad y economía procesal que desarrollan el debido proceso.

Ahora bien, se deberá declarar de manera oficiosa la caducidad en desarrollo de la garantía del debido proceso y en desarrollo de los principios de legalidad, celeridad, economía y eficacia de los procedimientos administrativos. Declaratoria que ya había sido estudiada y avalada por el Consejo de Estado en concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de 25 de mayo de 2005 con radicado 1632 y siendo el Magistrado Ponente el Dr. ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO en los siguientes términos:

“Siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual, el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda que su declaración procede de oficio. No tendría sentido que, si en un caso específico, la administración advierte que ha operado el fenómeno de la caducidad, no pudiese declararla de oficio, y a sabiendas continúe con la actuación que finalmente, culminará en un acto viciado de nulidad por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad administrativa en la actuación adelantada contra la FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL COLOMBIA DANZA, entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de Bello - Antioquia, que se constituyó por acta de No. 001 de 2 de diciembre de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 24 de diciembre de 2003 en el Libro 1 bajo el número 4419, la cual se identifica con el NIT 811.042.686-4.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al representante legal de la Fundación, el señor JOSE EMILIO MEDINA ARIAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 98.641.111, o por quien legalmente haga sus veces, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, norma vigente en el presente proceso administrativo dado que su inicio acaeció antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 –CPACA–.

ARTÍCULO TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior y en procedimiento diferente, se insta a la Dirección de Asesoría Legal y Control para que de oficio y en ejercicio de su competencia, inicie el procedimiento que corresponda, a fin de establecer el cumplimiento

de las disposiciones normativas por parte de la FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL COLOMBIA DANZA por lo hechos que no han sido objeto de investigación en el expediente que con el presente acto administrativo se declara su caducidad.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición el cual debe ser interpuesto ante el Gobernador del Departamento de Antioquia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE


SERGIO FAJARDO VALDERRAMA
Gobernador de Antioquia


ERIKA TATIANA SÁNCHEZ GÓMEZ
Directora Asesoría Legal y de Control

RESOLUCION NUMERO 126792

: 02/10/2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO A LA FUNDACIÓN SOCIAL VIDA

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la República en los Decretos Nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995, 0427 de 1996, y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

El Gobernador de Antioquia ejerce la facultad de Inspección y Vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, por delegación del Presidente de la República mediante la Ley 22 de 1987 modificada por la 489 de 1998 y el Decreto Ley 019 de 2012 y reglamentada mediante los decretos nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995 y 0427 de 1996.

II. ANTECEDENTES FÁCTICOS

1. Que por Acta de Constitución de 6 de abril de 2006, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 21 de abril de 2006 en el Libro 1 bajo el número 1143, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN SOCIAL VIDA, la cual se identifica con el NIT 900.080.976-1 y su domicilio es el Municipio de Medellín – Antioquia.
2. Dentro del Plan de Inspección para el año 2009, uno de los programas que trazó la Dirección de Asesoría Legal y de Control fue el de velar por que las Entidades sin Ánimo de Lucro -ESAL- cumplieran con las normas legales Decreto 054 de 1974, Decreto 0427 de 1996, Decreto 1318 de 1988, Decreto 1093 de 1989, Decreto 2649 de 1993, Ley 190 de 1995 y Ley, 222 de 1995.
3. El 14 de octubre de 2009, mediante comunicado con radicado 296655 se requirió a la FUNDACIÓN SOCIAL VIDA para que presente la siguiente información en un plazo de quince (15) días:

- a. Prueba de existencia y representación legal (Certificado de Cámara de Comercio).
 - b. Estatutos actualizados
 - c. Inscripción de libros oficiales administrativos (Actas de Asamblea, Actas de Junta Directiva y Libro de Socios)
 - d. Proyecto de presupuesto de 2009
 - e. Estados Financieros a diciembre de 2008 certificados y/o dictaminados. Anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público
 - f. Acta mediante la cual se aprobaron los estados financieros y el proyecto de presupuesto. (Fiel copia del libro de actas registrado).
4. Mediante Auto N° 4068 del 10 de diciembre de 2009 se ordenó el Inicio de la Investigación a la FUNDACIÓN SOCIAL VIDA por no haber dado respuesta al requerimiento que se ha descrito en los numerales anteriores.
5. Con fines que obra como prueba en el expediente, La Directora de Asesoría Legal y de Control el 23 de octubre de 2013 realiza un certificado en el cual se consigna lo siguiente:

“La Directora de Asesoría legal y de Control de la Gobernación de Antioquia hace constar que el expediente del proceso identificado con IVC N° 0124-12 contra la FUNDACIÓN SOCIAL VIDA, identificada con NIT 900.080.976-1, fue encontrado en la estantería donde reposa información de cumplimiento de normatividad en el archivo de gestión de la Dirección de Asesoría Legal.

Verificado el expediente se encuentra la siguiente situación:

- 1. El proceso fue sustanciado por Jorge Iván Restrepo López, quien ya no labora en la Dirección, por su deceso ocurrido el 22 de octubre de 2013.*
 - 2. El inicio del proceso fue el 14 de octubre de 2009, mediante requerimiento.*
 - 3. Se profirió auto de inicio de investigación el 10 de diciembre de 2009. La facultad sancionatoria para la administración Departamental venció el 10 de diciembre de 2012.*
 - 4. A la fecha de encontrarse y dada la etapa procesal en que se encontró el expediente cuya última actuación es el auto de inicio de investigación no es posible gestionar trámite alguno, pues por términos no sería posible garantizar un debido proceso”.*
6. El Auto de Inicio de Inicio de Investigación no fue notificado al Representante Legal de la Fundación, pese haberse realizado la citación para realizar dicha diligencia mediante comunicado con radicado 357930 del 17 de diciembre de 2009.

7. Que como se puede apreciar de la lectura del acervo probatorio en el expediente ha transcurrido más de tres (3) años, desde que la administración asumió el conocimiento de la investigación y en la cual no se dictó acto administrativo de carácter sancionatorio y por lo tanto se perdió dicha facultad.

III. ANÁLISIS JURÍDICO Y PROBATORIO DE LO ACTUADO

Teniendo en cuenta que le inicio del procedimiento administrativo sancionatorio ocurrió antes del 12 de julio de 2012, fecha en la que entró en vigencia la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el presente proceso se debe seguir rituando conforme al Decreto 01 de 1984 o conocido como "Código de Procedimiento Administrativo".

En dicha disposición legal se ha expresado de manera clara el plazo en las cuales las entidades públicas pueden dictar los actos administrativos de carácter sancionatorio. Disposición que se encuentra en el artículo 39 que reza:

"Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas".

La caducidad como institución jurídica tiene reconocimiento como garantía constitucional que se desprende del Debido Proceso que se consagra en el artículo 29 de la Constitución Política en sentido que el *Ius Puniendi* que tiene la administración no es absoluta y por lo tanto tiene determinados límites materiales y temporales.

En cuanto a los límites materiales se deben circunscribir a la realización de determinadas conductas que el mismo ordenamiento jurídico ha considerado que transgreden un determinado bien jurídicamente tutelable. Y en cuanto a los límites temporales hacer referencia al lapso en el cual el aparato sancionador debe actuar y garantizando un debido proceso puede imponer las sanciones que se establece por haber transgredido determinadas norma, límite que tiene como finalidad para contrarrestar la incertidumbre que tiene el administrado en la forma que finalizará el proceso que se lleva en su contra.

Que dentro del contexto de las investigaciones administrativas la caducidad ha sido definida por el H. Consejo de Estado en Sentencias del 14 de julio de 1995, expediente 5098 MP. Doctor Álvaro Lecompte Luna; y Sentencia del 2 de abril de 1998, Sección Primera expediente 4438, MP: Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en los siguientes términos:

"...Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de las consideraciones que no sean solo el transcurso de tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable...".

Que dicho Cuerpo Colegiado en sentencia del 15 de marzo de 2001, MP. María Elena Giraldo Gómez, ha reiterado lo siguiente:

"La caducidad de la acción administrativa es consecuencia del vencimiento del plazo legal fijado a la Administración para investigar cuando se presenta un hecho que pueda ocasionarla".

Y agrega que:

"La caducidad administrativa, se produce en la sede administrativa y se traduce, en lo que respecta a la misma administración, en la pérdida de competencia temporal".

En este orden de ideas, el Departamento de Antioquia ha perdido la competencia temporal para dictar resolución alguna de carácter sancionatorio y deberá proferir el acto correspondiente así lo declare en desarrollo de los principios legales de legalidad, igualdad, celeridad y economía procesal que desarrollan el debido proceso.

Ahora bien, se deberá declarar de manera oficiosa la caducidad en desarrollo de la garantía del debido proceso y en desarrollo de los principios de legalidad, celeridad, economía y eficacia de los procedimientos administrativos. Declaratoria que ya había sido estudiada y avalada por el Consejo de Estado en concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de 25 de mayo de 2005 con radicado 1632 y siendo el Magistrado Ponente el Dr. ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO en los siguientes términos:

"Siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual, el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda que su declaración procede de oficio. No tendría sentido que, si en un caso específico, la administración advierte que ha operado el fenómeno de la caducidad, no pudiese declararla de oficio, y a sabiendas continúe con la actuación que finalmente, culminará en un acto viciado de nulidad por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite".

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad administrativa en la actuación adelantada contra la FUNDACIÓN SOCIAL VIDA, entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de Medellín - Antioquia, que se constituyó por acta de 6 de abril de 2006, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 21 de abril de 2006 en el Libro 1 bajo el número 1143, y se identifica con el NIT 900.080.976-1.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Representante Legal de la Fundación, la señora MARTHA EUGENIA LLANO, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 32.557.514, o por quien legalmente haga sus veces, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, norma vigente en el presente proceso administrativo dado que su inicio acaeció antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 –CPACA–.

ARTÍCULO TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior y en procedimiento diferente, se insta a la Dirección de Asesoría Legal y Control para que de oficio y en ejercicio de su competencia, inicie el procedimiento que corresponda, a fin de establecer el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la FUNDACIÓN SOCIAL VIDA por lo hechos que no han sido objeto de investigación en el expediente que con el presente acto administrativo se declara su caducidad.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual debe ser interpuesto ante el Gobernador del Departamento de Antioquia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE


SERGIO FAJARDO VALDERRAMA
Gobernador de Antioquia


ERIKA TATIANA SÁNCHEZ GÓMEZ
Directora Asesoría Legal y de Control

RESOLUCION NUMERO 126793

: 02/10/2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO A LA FUNDACIÓN SCOUTS KATIOS LAS ÁGUILAS –FUNDESKA-

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la República en los Decretos Nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995, 0427 de 1996, y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

El Gobernador de Antioquia ejerce la facultad de Inspección y Vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, por delegación del Presidente de la República mediante la Ley 22 de 1987 modificada por la 489 de 1998 y el Decreto Ley 019 de 2012 y reglamentada mediante los decretos nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995 y 0427 de 1996.

II. ANTECEDENTES FÁCTICOS

1. Que por Acta de Constitución de 26 de noviembre de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín de Urabá el 26 de febrero de 2004 en el Libro 1 bajo el número 00002962, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN SCOUTS KATIOS LAS ÁGUILAS –FUNDESKA-, la cual se identifica con el NIT 811.043.803-4 y su domicilio es el Municipio de Apartadó – Antioquia.
2. Dentro del Plan de Inspección para el año 2009, uno de los programas que trazó la Dirección de Asesoría Legal y de Control fue el de velar por que las Entidades sin Ánimo de Lucro -ESAL- cumplieran con las normas legales Decreto 054 de 1974, Decreto 0427 de 1996, Decreto 1318 de 1988, Decreto 1093 de 1989, Decreto 2649 de 1993, Ley 190 de 1995 y Ley, 222 de 1995.
3. El 13 de noviembre de 2009, mediante comunicado con radicado 325850 se requirió a la FUNDACIÓN SCOUTS KATIOS LAS ÁGUILAS –FUNDESKA- para que presente la siguiente información en un plazo de quince (15) días:

- a. Prueba de existencia y representación legal (Certificado de Cámara de Comercio).
 - b. Estatutos actualizados
 - c. Inscripción de libros oficiales administrativos (Actas de Asamblea, Actas de Junta Directiva y Libro de Socios)
 - d. Proyecto de presupuesto de 2009
 - e. Estados Financieros a diciembre de 2008 certificados y/o dictaminados. Anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público
 - f. Acta mediante la cual se aprobaron los estados financieros y el proyecto de presupuesto. (Fiel copia del libro de actas registrado).
4. Mediante Auto N° 0573 del 4 de marzo de 2010 se ordenó el Inicio de la Investigación a la FUNDACIÓN SCOUTS KATIOS LAS ÁGUILAS –FUNDESKA- por no haber dado respuesta al requerimiento que se ha descrito en los numerales anteriores.
5. Con fines que obra como prueba en el expediente, La Directora de Asesoría Legal y de Control el 23 de octubre de 2013 realiza un certificado en el cual se consigna lo siguiente:

“La Directora de Asesoría legal y de Control de la Gobernación de Antioquia hace constar que el expediente del proceso identificado con IVC N° 501058 contra la FUNDACIÓN SCOUTS KATIOS LAS ÁGUILAS –FUNDESKA-, identificada con NIT 811.043.803-4, fue encontrado en la estantería donde reposa información de cumplimiento de normatividad en el archivo de gestión de la Dirección de Asesoría Legal.

Verificado el expediente se encuentra la siguiente situación:

- 1. El proceso fue sustanciado por Jorge Iván Restrepo López, quien ya no labora en la Dirección, por su deceso ocurrido el 22 de octubre de 2013.*
 - 2. El inicio del proceso fue el 13 de noviembre de 2009, mediante requerimiento.*
 - 3. Se profirió auto de inicio de investigación el 4 de marzo de 2010. La facultad sancionatoria para la administración Departamental venció el 4 de marzo de 2013.*
 - 4. A la fecha de encontrarse del proceso y dada la etapa procesal en que se encontró que la última actuación que reposa en el expediente es el auto de inicio de investigación no es posible gestionar trámite alguno, pues por términos no sería posible garantizar un debido proceso.”*
6. El Auto de Inicio de Inicio de Investigación no fue notificado al Representante Legal de la Fundación.

7. Que como se puede apreciar de la lectura del acervo probatorio en el expediente ha transcurrido más de tres (3) años, desde que la administración asumió el conocimiento de la investigación y en la cual no se dictó acto administrativo de carácter sancionatorio y por lo tanto se perdió dicha facultad.

III. ANÁLISIS JURÍDICO Y PROBATORIO DE LO ACTUADO

Teniendo en cuenta que le inicio del procedimiento administrativo sancionatorio ocurrió antes del 12 de julio de 2012, fecha en la que entró en vigencia la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el presente proceso se debe seguir rituando conforme al Decreto 01 de 1984 o conocido como "Código de Procedimiento Administrativo".

En dicha disposición legal se ha expresado de manera clara el plazo en las cuales las entidades públicas pueden dictar los actos administrativos de carácter sancionatorio; Disposición que se encuentra en el artículo 39 que reza:

"Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas".

La caducidad como institución jurídica tiene reconocimiento como garantía constitucional que se desprende del Debido Proceso que se consagra en el artículo 29 de la Constitución Política en sentido que el *Ius Puniendi* que tiene la administración no es absoluta y por lo tanto tiene determinados límites materiales y temporales.

En cuanto a los límites materiales se deben circunscribir a la realización de determinadas conductas que el mismo ordenamiento jurídico ha considerado que transgreden un determinado bien jurídicamente tutelable. Y en cuanto a los límites temporales hacen referencia al lapso en el cual el aparato sancionador debe actuar y garantizando un debido proceso puede imponer las sanciones que se establece por haber transgredido determinadas norma, límite que tiene como finalidad para contrarrestar la incertidumbre que tiene el administrado en la forma que finalizará el proceso que se lleva en su contra.

Que dentro del contexto de las investigaciones administrativas la caducidad ha sido definida por el H. Consejo de Estado en Sentencias del 14 de julio de 1995, expediente 5098 MP. Doctor Álvaro Lecompte Luna; y Sentencia del 2 de abril de 1998, Sección Primera expediente 4438, MP: Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en los siguientes términos:

"...Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de las consideraciones que no sean solo el transcurso de tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable...".

Que dicho Cuerpo Colegiado en sentencia del 15 de marzo de 2001, MP. María Elena Giraldo Gómez, ha reiterado lo siguiente:

"La caducidad de la acción administrativa es consecuencia del vencimiento del plazo legal fijado a la Administración para investigar cuando se presenta un hecho que pueda ocasionarla".

Y agrega que:

"La caducidad administrativa, se produce en la sede administrativa y se traduce, en lo que respecta a la misma administración, en la pérdida de competencia temporal".

En este orden de ideas, el Departamento de Antioquia ha perdido la competencia temporal para dictar resolución alguna de carácter sancionatorio y deberá proferir el acto correspondiente así lo declare en desarrollo de los principios legales de legalidad, igualdad, celeridad y economía procesal que desarrollan el debido proceso.

Ahora bien, se deberá declarar de manera oficiosa la caducidad en desarrollo de la garantía del debido proceso y en desarrollo de los principios de legalidad, celeridad, economía y eficacia de los procedimientos administrativos. Declaratoria que ya había sido estudiada y avalada por el Consejo de Estado en concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de 25 de mayo de 2005 con radicado 1632 y siendo el Magistrado Ponente el Dr. ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO en los siguientes términos:

"Siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual, el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda que su declaración procede de oficio. No tendría sentido que, si en un caso específico, la administración advierte que ha operado el fenómeno de la caducidad, no pudiese declararla de

oficio, y a sabiendas continúe con la actuación que finalmente, culminará en un acto viciado de nulidad por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad administrativa en la actuación adelantada contra la FUNDACIÓN SCOUTS KATIOS LAS ÁGUILAS –FUNDESKA-, entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de Apartadó - Antioquia, que se constituyó por acta de 26 de noviembre de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín de Urabá el 26 de febrero de 2004 en el Libro 1 bajo el número 00002962 y se identifica con el NIT 811.043.803-4.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al representante legal de la Fundación, el señor JULIÁN FRANCO NOREÑA, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 18.414.560, o por quien legalmente haga sus veces, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, norma vigente en el presente proceso administrativo dado que su inicio acaeció antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 –CPACA-.

ARTÍCULO TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior y en procedimiento diferente, se insta a la Dirección de Asesoría Legal y Control para que de oficio y en ejercicio de su competencia, inicie el procedimiento que corresponda, a fin de establecer el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la FUNDACIÓN SCOUTS KATIOS LAS ÁGUILAS –FUNDESKA- por lo hechos que no han sido objeto de investigación en el expediente que con el presente acto administrativo se declara su caducidad.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición el cual debe ser interpuesto ante el Gobernador del Departamento de Antioquia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE


SERGIO FAJARDO VALDERRAMA
Gobernador de Antioquia


ERIKA TATIANA SÁNCHEZ GÓMEZ
Directora Asesoría Legal y de Control

RESOLUCION NUMERO 126794

02/10/2014

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la República en los Decretos Nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995, 0427 de 1996, y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

El Gobernador de Antioquia ejerce la facultad de Inspección y Vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, por delegación del Presidente de la República mediante la Ley 22 de 1987 modificada por la 489 de 1998 y el Decreto Ley 019 de 2012 y reglamentada mediante los decretos nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995 y 0427 de 1996.

II. ANTECEDENTES FÁCTICOS

1. Que por Acta de Constitución de 30 de mayo de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de Urabá el 14 de julio de 2003 en el Libro 1 bajo el número 00002644, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN VIVA FELIZ, la cual se identifica con el NIT 841.000.576-1 y su domicilio es el Municipio de Turbo – Antioquia.
2. Dentro del Plan de Inspección para el año 2009, uno de los programas que trazó la Dirección de Asesoría Legal y de Control fue el de velar por que las Entidades sin Ánimo de Lucro -ESAL- cumplieran con las normas legales Decreto 054 de 1974, Decreto 0427 de 1996, Decreto 1318 de 1988, Decreto 1093 de 1989, Decreto 2649 de 1993, Ley 190 de 1995 y Ley, 222 de 1995.
3. El 13 de noviembre de 2009, mediante comunicado con radicado 325847 se requirió a la FUNDACIÓN VIVA FELIZ para que presente la siguiente información en un plazo de quince (15) días:
 - a. Prueba de existencia y representación legal (Certificado de Cámara de Comercio).

- b. Estatutos actualizados
 - c. Inscripción de libros oficiales administrativos (Actas de Asamblea, Actas de Junta Directiva y Libro de Socios)
 - d. Proyecto de presupuesto de 2009
 - e. Estados Financieros a diciembre de 2008 certificados y/o dictaminados. Anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público
 - f. Acta mediante la cual se aprobaron los estados financieros y el proyecto de presupuesto. (Fiel copia del libro de actas registrado).
4. Mediante Auto N° 2800 del 16 de septiembre de 2010 se ordenó el Inicio de la Investigación a la FUNDACIÓN VIVA FELIZ por no haber dado respuesta al requerimiento que se ha descrito en los numerales anteriores.
5. Con fines que obra como prueba en el expediente, La Directora de Asesoría Legal y de Control el 23 de octubre de 2013 realiza un certificado en el cual se consigna lo siguiente:

“constar que el expediente del proceso identificado con IVC N° 501098 contra la FUNDACIÓN VIVA FELIZ, identificada con NIT 841.00.576-1, fue encontrado en la estantería donde reposa información de cumplimiento de normatividad en el archivo de gestión de la Dirección de Asesoría Legal.

Verificado el expediente se encuentra la siguiente situación:

- 1. *El proceso fue sustanciado por Jorge Iván Restrepo López, quien ya no labora en la Dirección, por su deceso ocurrido el 22 de octubre de 2013.*
 - 2. *El inicio del proceso fue el 13 de noviembre de 2009, mediante requerimiento.*
 - 3. *Se profirió auto de inicio de investigación el 16 de septiembre de 2010. La facultad sancionatoria para la administración Departamental venció el 16 de septiembre de 2013.*
 - 4. *A la fecha de encontrarse del proceso y dada la etapa procesal en que se encontró que la última actuación que reposa en el expediente es el auto de inicio de investigación no es posible gestionar trámite alguno, pues por términos no sería posible garantizar un debido proceso”.*
6. El Auto de Inicio de Inicio de Investigación no fue notificado al Representante Legal de la Fundación, pese haberse realizado la citación para realizar dicha diligencia mediante comunicado E201000214645 del 28 de septiembre de 2010.

7. Que como se puede apreciar de la lectura del acervo probatorio en el expediente ha transcurrido más de tres (3) años, desde que la administración asumió el conocimiento de la investigación y en la cual no se dictó acto administrativo de carácter sancionatorio y por lo tanto se perdió dicha facultad.

III. ANÁLISIS JURÍDICO Y PROBATORIO DE LO ACTUADO

Teniendo en cuenta que le inicio del procedimiento administrativo sancionatorio ocurrió antes del 12 de julio de 2012, fecha en la que entró en vigencia la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el presente proceso se debe seguir rituando conforme al Decreto 01 de 1984 o conocido como "Código de Procedimiento Administrativo".

En dicha disposición legal se ha expresado de manera clara el plazo en las cuales las entidades públicas pueden dictar los actos administrativos de carácter sancionatorio. Disposición que se encuentra en el artículo 39 que reza:

"Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas".

La caducidad como institución jurídica tiene reconocimiento como garantía constitucional que se desprende del Debido Proceso que se consagra en el artículo 29 de la Constitución Política en sentido que el *Ius Puniendi* que tiene la administración no es absoluta y por lo tanto tiene determinados límites materiales y temporales.

En cuanto a los límites materiales se deben circunscribir a la realización de determinadas conductas que el mismo ordenamiento jurídico ha considerado que transgreden un determinado bien jurídicamente tutelable. Y en cuanto a los límites temporales hacen referencia al lapso en el cual el aparato sancionador debe actuar y garantizando un debido proceso puede imponer las sanciones que se establece por haber transgredido determinadas norma, límite que tiene como finalidad para contrarrestar la incertidumbre que tiene el administrado en la forma que finalizará el proceso que se lleva en su contra.

Que dentro del contexto de las investigaciones administrativas la caducidad ha sido definida por el H. Consejo de Estado en Sentencias del 14 de julio de 1995, expediente 5098 MP. Doctor Álvaro Lecompte Luna; y Sentencia del 2 de abril de 1998, Sección Primera expediente 4438, MP: Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en los siguientes términos:

“...Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de las consideraciones que no sean solo el transcurso de tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable...”.

Que dicho Cuerpo Colegiado en sentencia del 15 de marzo de 2001, MP. María Elena Giraldo Gómez, ha reiterado lo siguiente:

“La caducidad de la acción administrativa es consecuencia del vencimiento del plazo legal fijado a la Administración para investigar cuando se presenta un hecho que pueda ocasionarla”.

Y agrega que:

“La caducidad administrativa, se produce en la sede administrativa y se traduce, en lo que respecta a la misma administración, en la pérdida de competencia temporal”.

En este orden de ideas, el Departamento de Antioquia ha perdido la competencia temporal para dictar resolución alguna de carácter sancionatorio y deberá proferir el acto correspondiente así lo declare en desarrollo de los principios legales de legalidad, igualdad, celeridad y economía procesal que desarrollan el debido proceso.

Ahora bien, se deberá declarar de manera oficiosa la caducidad en desarrollo de la garantía del debido proceso y en desarrollo de los principios de legalidad, celeridad, economía y eficacia de los procedimientos administrativos. Declaratoria que ya había sido estudiada y avalada por el Consejo de Estado en concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de 25 de mayo de 2005 con radicado 1632 y siendo el Magistrado Ponente el Dr. ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO en los siguientes términos:

“Siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual, el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda que su declaración procede de oficio. No tendría sentido que, si en un caso específico, la administración advierte que ha operado el fenómeno de la caducidad, no pudiese declararla de

oficio, y a sabiendas continúe con la actuación que finalmente, culminará en un acto viciado de nulidad por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad administrativa en la actuación adelantada contra la FUNDACIÓN VIVA FELIZ, entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de Turbo - Antioquia, que se constituyó por acta de 30 de mayo de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de Urabá el 14 de julio de 2003 en el Libro 1 bajo el número 00002644, y se identifica con el NIT 841.000.576-1.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Representante Legal de la Fundación, la señora CECILIA HENRÍQUEZ VALENCIA, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 21.931.847, o por quien legalmente haga sus veces, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, norma vigente en el presente proceso administrativo dado que su inicio acaeció antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 –CPACA–.

ARTÍCULO TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior y en procedimiento diferente, se insta a la Dirección de Asesoría Legal y Control para que de oficio y en ejercicio de su competencia, inicie el procedimiento que corresponda, a fin de establecer el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la FUNDACIÓN VIVA FELIZ por lo hechos que no han sido objeto de investigación en el expediente que con el presente acto administrativo se declara su caducidad.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición el cual debe ser interpuesto ante el Gobernador del Departamento de Antioquia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE


 **SERGIO FAJARDO VALDERRAMA**
Gobernador de Antioquia


 **ERIKA TATIANA SÁNCHEZ GÓMEZ**
Directora Asesoría Legal y de Control

RESOLUCION NUMERO 126795

: 02/10/2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO A LA FUNDACIÓN DEJANDO HUELLAS

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la República en los Decretos Nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995, 0427 de 1996, y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

El Gobernador de Antioquia ejerce la facultad de Inspección y Vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, por delegación del Presidente de la República mediante la Ley 22 de 1987 modificada por la 489 de 1998 y el Decreto Ley 019 de 2012 y reglamentada mediante los decretos nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995 y 0427 de 1996.

II. ANTECEDENTES FÁCTICOS

1. Que por Acta de Constitución de 1° de febrero de 2006 de la Asamblea de Fundadores, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 23 de marzo de 2006 en el Libro 1 bajo el número 681, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN DEJANDO HUELLAS, tiene su domicilio en la ciudad de Medellín y se identifica con el NIT: 900.076.682-4
2. Dentro del Plan de Inspección para el año 2009, uno de los programas que trazó la Dirección de Asesoría Legal y de Control fue el de velar por que las Entidades sin Animo de Lucro-ESAL- cumplieran con las normas legales Decreto 054 de 1974, Decreto 0427 de 1996, Decreto 1318 de 1988, Decreto 1093 de 1989, Decreto 2649 de 1993, Ley 190 de 1995 y Ley, 222 de 1995.
3. El 14 de octubre de 2009 mediante comunicado con radicado 296587, se requirió a la denominada FUNDACIÓN DEJANDO HUELLAS para que presente la siguiente información en un plazo de quince (15) días:

- a. Prueba de existencia y representación legal (certificado de Cámara de Comercio).
 - b. Estatutos actualizados
 - c. Inscripción de libros oficiales administrativos (Actas de Asamblea, Actas de Junta Directiva y Libro de Socios)
 - d. Proyecto de presupuesto de 2009.
 - e. Estados Financieros a diciembre de 2008 certificados y/o dictaminados. Anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público
 - f. Acta mediante la cual se aprobaron los estados financieros y el proyecto de presupuesto. (Fiel copia del libro de actas registrado).
4. La Fundación no le dio respuesta al requerimiento realizado.
5. Mediante Auto N° 0752 del 12 de marzo de 2010 se ordenó el Inicio de la Investigación a la denominada FUNDACIÓN DEJANDO HUELLAS por no haber dado respuesta al requerimiento que se ha descrito en los numerales anteriores.
6. Se requirió a la representante legal de la Fundación para que se presentara ante la Dirección de Asesoría Legal y de Control para efecto de notificarle personalmente el Auto de Inicio de Investigación, mediante comunicado del 17 de marzo de 2010 con el radicado E201000163949.
7. La notificación se realizó mediante la fijación de un edicto en la cartelera de la Dirección de Asesoría Legal y de Control entre el 26 de abril al 11 de mayo de 2012.
8. Con fines que obra como prueba en el expediente, La Directora de Asesoría Legal y de Control el 23 de octubre de 2013 realiza un certificado en el cual se consigna lo siguiente:

“La Directora de Asesoría legal y de Control de la Gobernación de Antioquia hace FUNDACIÓN DEJANDO HUELLAS, identificada con NIT 900.076.682-4, fue encontrado en la estantería donde reposa información de cumplimiento de normatividad en el archivo de gestión de la Dirección de Asesoría Legal.

Verificado el expediente se encuentra la siguiente situación:

1. *El proceso fue sustanciado por Jorge Iván Restrepo López, quien ya no labora en la Dirección por su deceso ocurrido el 22 de octubre de 2013.*
 2. *No se encontraba reportado en la base de datos de la Dirección.*
 3. *El inicio del proceso fue el 14 de octubre de 2009 mediante requerimiento.*
 4. *La facultad sancionatoria para la administración Departamental venció el 14 de octubre de 2012.*
 5. *A la fecha de encontrarse el expediente y dada la etapa procesal en que se encontró cuando su última actuación fue: notificación mediante edicto del auto de inicio de investigación del 26 de abril a 11 de mayo de 2012 no es posible gestionar trámite alguno, pues por términos no sería posible garantizar un debido proceso”.*
9. Que como se puede apreciar de la lectura del acervo probatorio en el expediente ha transcurrido más de tres (3) años, desde que la administración asumió el conocimiento de la investigación y en la cual no se dictó acto administrativo de carácter sancionatorio y por lo tanto se perdió dicha facultad.

III. ANÁLISIS JURÍDICO Y PROBATORIO DE LO ACTUADO

Teniendo en cuenta que le inicio del procedimiento administrativo sancionatorio ocurrió antes del 12 de julio de 2012, fecha en la que entró en vigencia la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el presente proceso se debe seguir rituando conforme al Decreto 01 de 1984 o conocido como “Código de Procedimiento Administrativo”.

En dicha disposición legal se ha expresado de manera clara el plazo en las cuales las entidades públicas pueden dictar los actos administrativos de carácter sancionatorio. Disposición que se encuentra en el artículo 39 que reza:

“Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.

La caducidad como institución jurídica tiene reconocimiento como garantía constitucional que se desprende del Debido Proceso que se consagra en el artículo 29 de la Constitución Política en sentido que el *Ius Puniendi* que tiene la administración no es absoluta y por lo tanto tiene determinados límites materiales y temporales.

En cuanto a los límites materiales se deben circunscribir a la realización de determinadas conductas que el mismo ordenamiento jurídico ha considerado que transgreden un determinado bien jurídicamente tutelable. Y en cuanto a los límites temporales hacen referencia al lapso en el cual el aparato sancionador debe actuar y garantizando un debido proceso puede imponer las sanciones que se establece por haber transgredido determinadas norma, límite que tiene como finalidad para contrarrestar la incertidumbre que tiene el administrado en la forma que finalizará el proceso que se lleva en su contra. 85

Que dentro del contexto de las investigaciones administrativas la caducidad ha sido definida por el H. Consejo de Estado en Sentencias del 14 de julio de 1995, expediente 5098 MP. Doctor Álvaro Lecompte Luna; y Sentencia del 2 de abril de 1998, Sección Primera expediente 4438, MP: Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en los siguientes términos:

"...Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de las consideraciones que no sean solo el transcurso de tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable..."

Que dicho Cuerpo Colegiado en sentencia del 15 de marzo de 2001, MP. María Elena Giraldo Gómez, ha reiterado lo siguiente:

"La caducidad de la acción administrativa es consecuencia del vencimiento del plazo legal fijado a la Administración para investigar cuando se presenta un hecho que pueda ocasionarla".

Y agrega que:

"La caducidad administrativa, se produce en la sede administrativa y se traduce, en lo que respecta a la misma administración, en la pérdida de competencia temporal".

En este orden de ideas, el Departamento de Antioquia ha perdido la competencia temporal para dictar resolución alguna de carácter sancionatorio y deberá proferir el acto correspondiente así lo declare en desarrollo de los principios legales de legalidad, igualdad, celeridad y economía procesal que desarrollan el debido proceso.

Ahora bien, se deberá declarar de manera oficiosa la caducidad en desarrollo de la garantía del debido proceso y en desarrollo de los principios de legalidad, celeridad, economía y eficacia de los procedimientos administrativos. Declaratoria que ya había sido estudiada y avalada por el Consejo de Estado en concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de 25 de mayo de 2005 con radicado 1632 y siendo el Magistrado Ponente el Dr. ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO en los siguientes términos:

“Siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual, el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda que su declaración procede de oficio. No tendría sentido que, si en un caso específico, la administración advierte que ha operado el fenómeno de la caducidad, no pudiese declararla de oficio, y a sabiendas continúe con la actuación que finalmente, culminará en un acto viciado de nulidad por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad administrativa en la actuación adelantada contra la FUNDACIÓN DEJANDO HUELLAS, entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de Medellín - Antioquia, que se constituyó por acta de 1º de febrero de 2006 de la Asamblea de Fundadores, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 23 de marzo de 2006 en el Libro 1 bajo el número 681 y se identifica con el NIT: 900.076.682-4

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la representante legal de la Fundación, la señora PAULA ANDREA RESTREPO ROLDÁN, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 43.619.302, o por quien legalmente haga sus veces, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior y en procedimiento diferente, se insta a la Dirección de Asesoría Legal y Control para que de oficio y en ejercicio de su competencia, inicie el procedimiento que corresponda, a fin de establecer el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la FUNDACIÓN DEJANDO HUELLAS, por lo

hechos que no han sido objeto de investigación en el expediente que con el presente acto administrativo se declara su caducidad.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición el cual debe ser interpuesto ante el Gobernador del Departamento de Antioquia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE


 **SERGIO FAJARDO VALDERRAMA**
Gobernador de Antioquia


ERIKA TATIANA SÁNCHEZ GÓMEZ
Directora Asesoría Legal y de Control

RESOLUCION NUMERO 126796

02/10/2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO A LA FUNDACIÓN ESPIRALES DE VIDA

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la República en los Decretos Nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995, 0427 de 1996, y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

El Gobernador de Antioquia ejerce la facultad de Inspección y Vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, por delegación del Presidente de la República mediante la Ley 22 de 1987 modificada por la 489 de 1998 y el Decreto Ley 019 de 2012 y

reglamentada mediante los decretos nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995 y 0427 de 1996.

II. ANTECEDENTES FÁCTICOS

1. Que por Acta de Constitución de 3 de marzo de 2007, inscrita en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño el 17 de mayo de esa misma anualidad en el Libro 1 bajo el número 00009979, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN ESPIRALES DE VIDA, cuyo NIT es 900.150.558-5 y su domicilio principal es el municipio de Marinilla – Antioquia.
2. Dentro del Plan de Inspección para el año 2009, uno de los programas que trazó la Dirección de Asesoría Legal y de Control fue el de velar por que las Entidades sin Animo de Lucro-ESAL- cumplieran con las normas legales Decreto 054 de 1974, Decreto 0427 de 1996, Decreto 1318 de 1988, Decreto 1093 de 1989, Decreto 2649 de 1993, Ley 190 de 1995 y Ley, 222 de 1995.
3. El 13 de noviembre de 2009 mediante comunicado con radicado 306749, se requirió a la denominada FUNDACIÓN ESPIRALES DE VIDA para que presente la siguiente información en un plazo de quince (15) días:
 - a. Prueba de existencia y representación legal (certificado de Cámara de Comercio).
 - b. Estatutos actualizados
 - c. Inscripción de libros oficiales administrativos (Actas de Asamblea, Actas de Junta Directiva y Libro de Socios)
 - d. Proyecto de presupuesto de 2009
 - e. Estados Financieros a diciembre de 2008 certificados y/o dictaminados. Anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público
 - f. Acta mediante la cual se aprobaron los estados financieros y el proyecto de presupuesto. (Fiel copia del libro de actas registrado).
4. El representante legal de la Fundación no le dio respuesta al requerimiento.
5. Mediante Auto N° 4048 del 4 de diciembre de 2009 se ordenó el Inicio de la Investigación a la denominada FUNDACIÓN ESPIRALES DE VIDA por no darle cumplimiento a la normatividad que le rige.

6. Se citó al representante legal de la Fundación el día 17 de diciembre de 2009 mediante comunicado con radicado interno 357992 para que se presentara dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo del comunicado a efectos de notificar personalmente el auto de Inicio de Investigación.
7. El día 29 de diciembre de 2009 se practica la diligencia de notificación personal a la apoderada especial de la Fundación del Auto de Inicio de Investigación de acuerdo al poder especial que le otorgara el representante legal de la misma por documento privado del 28 de diciembre de la misma anualidad y reconocido personalmente ante la Notaría Única del Circulo de Marinilla.
8. Con fines que obra como prueba en el expediente, La Directora de Asesoría Legal y de Control el 23 de octubre de 2013 realiza un certificado en el cual se consigna lo siguiente:

“La Directora de Asesoría legal y de Control de la Gobernación de Antioquia hace constar que el expediente del proceso identificado con IVC N° 0143-12 contra la FUNDACIÓN ESPIRALES DE VIDA, identificada con NIT 900.150.558-5, fue encontrado en la estantería donde reposa información de cumplimiento de normatividad en el archivo de gestión de la Dirección de Asesoría Legal.

Verificado el expediente se encuentra la siguiente situación:

- 1. El proceso fue sustanciado por Jorge Iván Restrepo López, quien ya no labora en la Dirección, por su deceso ocurrido el 22 de octubre de 2013.*
- 2. No se encontraba reportado en la base de datos de la Dirección.*
- 3. El inicio del proceso fue el 26 de octubre de 2009 mediante requerimiento.*
- 4. Se profirió auto de inicio de investigación el 4 de diciembre de 2009. La facultad sancionatoria para la administración Departamental venció el 4 de diciembre de 2012.*
- 5. A la fecha de encontrarse del proceso y dada la etapa procesal en que se encontró que la última actuación que reposa en el expediente es diligencia de notificación personal del 29 de diciembre de 2009 del auto de inicio no es posible gestionar trámite alguno, pues por términos no sería posible garantizar un debido proceso.”*

9. Que como se puede apreciar de la lectura del acervo probatorio en el expediente ha transcurrido más de tres (3) años, desde que la administración asumió el conocimiento de la investigación y en la cual no se dictó acto administrativo de carácter sancionatorio y por lo tanto se perdió dicha facultad.

III. ANÁLISIS JURÍDICO Y PROBATORIO DE LO ACTUADO

Teniendo en cuenta que le inicio del procedimiento administrativo sancionatorio ocurrió antes del 12 de julio de 2012, fecha en la que entró en vigencia la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el presente proceso se debe seguir rituando conforme al Decreto 01 de 1984 o conocido como “Código de Procedimiento Administrativo”.

En dicha disposición legal se ha expresado de manera clara el plazo en las cuales las entidades públicas pueden dictar los actos administrativos de carácter sancionatorio. Disposición que se encuentra en el artículo 39 que reza:

“Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.

La caducidad como institución jurídica tiene reconocimiento como garantía constitucional que se desprende del Debido Proceso que se consagra en el artículo 29 de la Constitución Política en sentido que el *Ius Puniendi* que tiene la administración no es absoluta y por lo tanto tiene determinados límites materiales y temporales.

En cuanto a los límites materiales se deben circunscribir a la realización de determinadas conductas que el mismo ordenamiento jurídico ha considerado que transgreden un determinado bien jurídicamente tutelable. Y en cuanto a los límites temporales hacen referencia al lapso en el cual el aparato sancionador debe actuar y garantizando un debido proceso puede imponer las sanciones que se establece por haber transgredido determinadas norma, límite que tiene como finalidad para contrarrestar la incertidumbre que tiene el administrado en la forma que finalizará el proceso que se lleva en su contra.

Que dentro del contexto de las investigaciones administrativas la caducidad ha sido definida por el H. Consejo de Estado en Sentencias del 14 de julio de 1995, expediente

5098 MP. Doctor Álvaro Lecompte Luna; y Sentencia del 2 de abril de 1998, Sección Primera expediente 4438, MP: Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en los siguientes términos:

"...Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de las consideraciones que no sean solo el transcurso de tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable..."

Que dicho Cuerpo Colegiado en sentencia del 15 de marzo de 2001, MP. María Elena Giraldo Gómez, ha reiterado lo siguiente:

"La caducidad de la acción administrativa es consecuencia del vencimiento del plazo legal fijado a la Administración para investigar cuando se presenta un hecho que pueda ocasionarla".

Y agrega que:

"La caducidad administrativa, se produce en la sede administrativa y se traduce, en lo que respecta a la misma administración, en la pérdida de competencia temporal".

En este orden de ideas, el Departamento de Antioquia ha perdido la competencia temporal para dictar resolución alguna de carácter sancionatorio y deberá proferir el acto correspondiente así lo declare en desarrollo de los principios legales de legalidad, igualdad, celeridad y economía procesal que desarrollan el debido proceso.

Ahora bien, se deberá declarar de manera oficiosa la caducidad en desarrollo de la garantía del debido proceso y en desarrollo de los principios de legalidad, celeridad, economía y eficacia de los procedimientos administrativos. Declaratoria que ya había sido estudiada y avalada por el Consejo de Estado en concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de 25 de mayo de 2005 con radicado 1632 y siendo el Magistrado Ponente el Dr. ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO en los siguientes términos:

"Siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual, el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los

derechos constitucionales de los administrados, no hay duda que su declaración procede de oficio. No tendría sentido que, si en un caso específico, la administración advierte que ha operado el fenómeno de la caducidad, no pudiese declararla de oficio, y a sabiendas continúe con la actuación que finalmente, culminará en un acto viciado de nulidad por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad administrativa en la actuación adelantada contra la FUNDACIÓN ESPIRALES DE VIDA, entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el municipio de Marinilla- Antioquia, que se constituyó por acta de 3 de marzo de 2007, inscrita en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño el 17 de mayo de 2007 en el Libro 1 bajo el número 00009979 y se identifica con el NIT 900.150.557-5

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al representante legal de la Fundación, el señor JORGE MARIO PINEDA RIVERA, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 70.519.025, o por quien legalmente haga sus veces, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984.

ARTÍCULO TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior y en procedimiento diferente, se insta a la Dirección de Asesoría Legal y Control para que de oficio y en ejercicio de su competencia, inicie el procedimiento que corresponda, a fin de establecer el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la FUNDACIÓN ESPIRALES DE VIDA, por lo hechos que no han sido objeto de investigación en el expediente que con el presente acto administrativo se declara su caducidad.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición el cual debe ser interpuesto ante el Gobernador del Departamento de Antioquia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE


 **SERGIO FAJARDO VALDERRAMA**
Gobernador de Antioquia


 **ERIKA TATIANA SÁNCHEZ GÓMEZ**
Directora Asesoría Legal y de Control

RESOLUCION NUMERO 126797

02/10/2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ADELANTADO A LA FUNDACIÓN CÍVICA CONSTRUYAMOS UNA CIUDAD PARA TODOS

PEL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la República en los Decretos Nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995, 0427 de 1996, y,

I. COMPETENCIA

El Gobernador de Antioquia ejerce la facultad de Inspección y Vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, por delegación del Presidente de la República mediante la Ley 22 de 1987 modificada por la 489 de 1998 y el Decreto Ley 019 de 2012 y reglamentada mediante los decretos nacionales 1318 de 1988, 1093 de 1989, 1529 de 1990, 2150 de 1995 y 0427 de 1996.

II. ANTECEDENTES FÁCTICOS

1. Que por Acta de Constitución de 29 de abril de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 30 de mayo de 2003 en el Libro 1 bajo el número 1805, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN CÍVICA CONSTRUYAMOS UNA CIUDAD PARA TODOS, la cual se identifica con el NIT 811.039.504-1 y su domicilio es el Municipio de Medellín – Antioquia.
2. Dentro del Plan de Inspección para el año 2009, uno de los programas que trazó la Dirección de Asesoría Legal y de Control fue el de velar por que las Entidades sin Ánimo de Lucro -ESAL- cumplieran con las normas legales Decreto 054 de 1974, Decreto 0427 de 1996, Decreto 1318 de 1988, Decreto 1093 de 1989, Decreto 2649 de 1993, Ley 190 de 1995 y Ley, 222 de 1995.
3. El 14 de octubre de 2009, mediante comunicado con radicado 296578 se requirió a la FUNDACIÓN CÍVICA CONSTRUYAMOS UNA CIUDAD PARA TODOS para que presente la siguiente información en un plazo de quince (15) días:

- a. Prueba de existencia y representación legal (Certificado de Cámara de Comercio).
 - b. Estatutos actualizados
 - c. Inscripción de libros oficiales administrativos (Actas de Asamblea, Actas de Junta Directiva y Libro de Socios)
 - d. Proyecto de presupuesto de 2009
 - e. Estados Financieros a diciembre de 2008 certificados y/o dictaminados. Anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público
 - f. Acta mediante la cual se aprobaron los estados financieros y el proyecto de presupuesto. (Fiel copia del libro de actas registrado).
4. Mediante Auto N° 4061 del 10 de diciembre de 2009 se ordenó el Inicio de la Investigación a la FUNDACIÓN CÍVICA CONSTRUYAMOS UNA CIUDAD PARA TODOS por no haber dado respuesta al requerimiento que se ha descrito en los numerales anteriores.
5. Con fines que obra como prueba en el expediente, La Directora de Asesoría Legal y de Control el 23 de octubre de 2013 realiza un certificado en el cual se consigna lo siguiente:

“La Directora de Asesoría legal y de Control de la Gobernación de Antioquia hace constar que el expediente del proceso identificado con IVC N° 0113-12 contra la FUNDACIÓN CÍVICA CONSTRUYAMOS UNA CIUDAD PARA TODOS, identificada con NIT 811.039.504-1, fue encontrado en la estantería donde reposa información de cumplimiento de normatividad en el archivo de gestión de la Dirección de Asesoría Legal.

Verificado el expediente se encuentra la siguiente situación:

1. El proceso fue sustanciado por Jorge Iván Restrepo López, quien ya no labora en la Dirección, por su deceso ocurrido el 22 de octubre de 2013.
 2. El inicio del proceso fue el 14 de octubre de 2009, mediante requerimiento.
 3. Se profirió auto de inicio de investigación el 10 de diciembre de 2009. La facultad sancionatoria para la administración Departamental venció el 10 de diciembre de 2012.
 4. A la fecha de encontrarse y dada la etapa procesal en que se encontró el expediente cuya última actuación es el auto de inicio de investigación no es posible gestionar trámite alguno, pues por términos no sería posible garantizar un debido proceso”.
6. El Auto de Inicio de Inicio de Investigación no fue notificado al Representante Legal de la Fundación, pese haberse realizado la citación para realizar dicha diligencia

mediante comunicado con radicado 358573 del 17 de diciembre de 2009.

7. Que como se puede apreciar de la lectura del acervo probatorio en el expediente ha transcurrido más de tres (3) años, desde que la administración asumió el conocimiento de la investigación y en la cual no se dictó acto administrativo de carácter sancionatorio y por lo tanto se perdió dicha facultad.

III. ANÁLISIS JURÍDICO Y PROBATORIO DE LO ACTUADO

Teniendo en cuenta que le inicio del procedimiento administrativo sancionatorio ocurrió antes del 12 de julio de 2012, fecha en la que entró en vigencia la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el presente proceso se debe seguir rituando conforme al Decreto 01 de 1984 o conocido como “Código de Procedimiento Administrativo”.

En dicha disposición legal se ha expresado de manera clara el plazo en las cuales las entidades públicas pueden dictar los actos administrativos de carácter sancionatorio, Disposición que se encuentra en el artículo 39 que reza:

“Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”.

La caducidad como institución jurídica tiene reconocimiento como garantía constitucional que se desprende del Debido Proceso que se consagra en el artículo 29 de la Constitución Política en sentido que el *Ius Puniendi* que tiene la administración no es absoluta y por lo tanto tiene determinados límites materiales y temporales.

En cuanto a los límites materiales se deben circunscribir a la realización de determinadas conductas que el mismo ordenamiento jurídico ha considerado que transgreden un determinado bien jurídicamente tutelable. Y en cuanto a los límites temporales hacen referencia al lapso en el cual el aparato sancionador debe actuar y garantizando un debido proceso puede imponer las sanciones que se establece por haber transgredido determinadas norma, límite que tiene como finalidad para contrarrestar la incertidumbre que tiene el administrado en la forma que finalizará el proceso que se lleva en su contra.

Que dentro del contexto de las investigaciones administrativas la caducidad ha sido definida por el H. Consejo de Estado en Sentencias del 14 de julio de 1995, expediente

5098 MP. Doctor Álvaro Lecompte Luna; y Sentencia del 2 de abril de 1998, Sección Primera expediente 4438, MP: Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en los siguientes términos:

“...Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de las consideraciones que no sean solo el transcurso de tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable...”.

Que dicho Cuerpo Colegiado en sentencia del 15 de marzo de 2001, MP. María Elena Giraldo Gómez, ha reiterado lo siguiente:

“La caducidad de la acción administrativa es consecuencia del vencimiento del plazo legal fijado a la Administración para investigar cuando se presenta un hecho que pueda ocasionarla”.

Y agrega que:

“La caducidad administrativa, se produce en la sede administrativa y se traduce, en lo que respecta a la misma administración, en la pérdida de competencia temporal”.

En este orden de ideas, el Departamento de Antioquia ha perdido la competencia temporal para dictar resolución alguna de carácter sancionatorio y deberá proferir el acto correspondiente así lo declare en desarrollo de los principios legales de legalidad, igualdad, celeridad y economía procesal que desarrollan el debido proceso.

Ahora bien, se deberá declarar de manera oficiosa la caducidad en desarrollo de la garantía del debido proceso y en desarrollo de los principios de legalidad, celeridad, economía y eficacia de los procedimientos administrativos. Declaratoria que ya había sido estudiada y avalada por el Consejo de Estado en concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de 25 de mayo de 2005 con radicado 1632 y siendo el Magistrado Ponente el Dr. ENRIQUE JOSÉ ARBOLEDA PERDOMO en los siguientes términos:

“Siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual, el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los

derechos constitucionales de los administrados, no hay duda que su declaración procede de oficio. No tendría sentido que, si en un caso específico, la administración advierte que ha operado el fenómeno de la caducidad, no pudiese declararla de oficio, y a sabiendas continúe con la actuación que finalmente, culminará en un acto viciado de nulidad por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad administrativa en la actuación adelantada contra la FUNDACIÓN CÍVICA CONSTRUYAMOS UNA CIUDAD PARA TODOS, entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en el Municipio de Medellín - Antioquia, que se constituyó por acta de 29 de abril de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 30 de mayo de 2003 en el Libro 1 bajo el número 1805, y se identifica con el NIT 811.039.504-1.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al Representante Legal de la Fundación, el señor GUILLERMO LEÓN VIEIRA PALACIO, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 8.279.370, o por quien legalmente haga sus veces, conforme a lo establecido en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, norma vigente en el presente proceso administrativo dado que su inicio acaeció antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 –CPACA–.

ARTÍCULO TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior y en procedimiento diferente, se insta a la Dirección de Asesoría Legal y Control para que de oficio y en ejercicio de su competencia, inicie el procedimiento que corresponda, a fin de establecer el cumplimiento de las disposiciones normativas por parte de la FUNDACIÓN CÍVICA CONSTRUYAMOS UNA CIUDAD PARA TODOS por lo hechos que no han sido objeto de investigación en el expediente que con el presente acto administrativo se declara su caducidad.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición el cual debe ser interpuesto ante el Gobernador del Departamento de Antioquia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE


SERGIO FAJARDO VALDERRAMA
Gobernador de Antioquia


ERIKA TATIANA SÁNCHEZ GÓMEZ
Directora Asesoría Legal y de Control

RESOLUCION NUMERO 126798

02/10/2014

Por medio de la cual se Absuelve a la representante legal de la **COORPORACIÓN C&B SERVICIOS EMPRESARIALES**

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con fundamento en la delegación conferida por el Presidente de la República en los Decretos Nacionales 1318 de 1988, 1529 de 1990, 2150 de 1995 y 0427 de 1996, y

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA

La Dirección de Asesoría Legal y de Control mediante el Decreto Ordenanza 2575 de 2008 modificado por la ordenanza 29 de 2010, se le otorgó la facultad de adelantar la instrucción de las indagaciones preliminares y procesos sancionatorios frente a las entidades sin ánimo de lucro y proyectar para la firma del Gobernador los actos que pongan fin a las actuaciones.

II. ANTECEDENTES

1. La **COORPORACIÓN C&B SERVICIOS EMPRESARIALES**, es una Entidad Sin Ánimo de Lucro, con No. de ESAL 21-014983-21 y NIT 900612097-5 con domicilio en Medellín, mediante Acta 001 del 15 de marzo de 2013, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 23 de abril de 2013, en el libro 1 bajo el número 1593.
2. Con fundamento en las competencias asignadas a los Gobernadores para la Inspección y Vigilancia de las Entidades Sin Ánimo de Lucro; mediante oficio con Radicado No. E201400 216796 del 24 de febrero de 2014, se ordenó iniciar en contra de la Representante Legal de la entidad, **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO**, por no haber dado cumplimiento al Decreto 1093 de 1989 y Ley 222 de 1995, en concordancia con la Circular No. 00436 del 23 de noviembre de 2012.

3. Para dar inicio al proceso, se contó con la Constancia Secretarial, emitida por la Dirección de Asesoría Legal y de Control en la que consta: *"Que revisada la base de datos que se lleva en esta dirección, se encontró que el Representante Legal de la entidad COORPORACIÓN C&B SERVICIOS EMPRESARIALES, con NIT 900.612.097-5 no presentó los documentos exigidos por el Decreto 1093 de 1983 (SIC), relacionados con la presentación de la copia de los estatutos, los proyectos de presupuesto, los balances de cada ejercicio y el informe de gestión correspondiente al 2012"*.
4. De conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal, la Representante Legal de la entidad es la señora BEATRIZ ELENA GARCES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.495.316
5. El 23 de mayo del 2014 se emitió el Auto de Inicio y Formulación de Cargos No. 003117, en virtud del cual se da inicio a la investigación y se formulan los cargos ya mencionados.
6. Mediante Radicado No. E201400267699 del 14 de mayo de 2014, se cita a la Representante Legal para ser notificada del Auto de Inicio y Formulación de Cargos No. 003117 del 23 de mayo de 2014.
7. De conformidad con la constancia entregada por el proveedor de correo Cadena Courrier, la dirección de Notificación Judicial reportada por la entidad no es correcta, de tal forma que no fue posible entregar la citación, lo que dio lugar a que se realizara un Aviso para Entrega o Envío con Radicado E 201400297949 del 25 de junio de 2014.
8. El 04 de agosto de 2014, la Representante Legal se notifica mediante Aviso para Entrega o Envío con Radicado E 201400297949 del 25 de junio de 2014. el Auto de Inicio y Formulación de Cargos No. 3117 del 23 de mayo de 2014.

III. ANÁLISIS FÁCTICO

El Decreto 1093 de 1989, artículo primero establece para el Representante Legal de la entidad sin ánimo de lucro una obligación de presentar a estudio del

Gobernador, "...los estatutos de la entidad, los proyectos de presupuesto y los balances de cada ejercicio, con arreglo a las normas vigentes sobre la materia".

La Dirección de Asesoría Legal y de Control, mediante Auto No. 003117 del 23 de mayo de 2014 dispuso iniciar investigación y formular cargos a la representante legal BEATRIZ ELENA GARCES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.495.316, por considerar que en el año 2013 no había remitido la información relacionada con la aprobación del balance de 2012, el presupuesto para el 2013 y el informe de gestión exigido por la Ley 222 de 1995.

Verificado el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (fls4-7), se pudo constatar que la **COORPORACIÓN C&B SERVICIOS EMPRESARIALES** se constituyó mediante Acta 001 del 15 de marzo de 2013, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 23 de abril de 2013, en el libro 1 bajo el número 1593.

Significa entonces, que la representante legal de la **COORPORACIÓN C&B SERVICIOS EMPRESARIALES** no estaba en el deber de presentar la documentación requerida, por lo que se hace necesario absolverlo de los cargos formulados y ordenar el archivo de las diligencias.

Sin embargo, dada la importante función social que cumplen las entidades sin ánimo de lucro y estimando que la competencia de inspección, vigilancia y control de conformidad con la normatividad vigente corresponde al Gobernador del Departamento de Antioquia, a través de la Dirección de Asesoría Legal y de Control, se insta a la representante legal de la **COORPORACIÓN C&B SERVICIOS EMPRESARIALES** a dar estricto cumplimiento a las disposiciones consagradas en el Parágrafo del artículo 12 del Decreto 0427 del 5 de marzo de 1996, artículo 1° del Decreto 1093 de 1989, artículo 45° de la Ley 190 de 1995, Decreto 2649 de 1993, ley 222 de 1995, Circular No. 000194 del 6 de mayo de 2014 y las demás que rigen la materia, haciendo entrega de manera oportuna, periódica y cuando las circunstancias lo ameriten, de la documentación que está en la obligación legal de suministrar a dicha Dirección, a fin de evitar nuevos requerimientos en vía administrativa e iniciación de procesos sancionatorios en su contra, asimismo a mantener actualizados los datos de contacto de la entidad

como son dirección, teléfono y otros requeridos por el registro en la respectiva Cámara de Comercio.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ABSOLVER a la señora BEATRIZ ELENA GARCES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.495.316, en calidad de representante legal de la **COORPORACIÓN C&B SERVICIOS EMPRESARIALES**, identificado con No. de No. de ESAL 21-014983-21 y NIT 900612097-5 de los cargos formulados mediante Auto No. 003117 del 23 de mayo de 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO: ARCHIVAR el Expediente IVC 1334-14 del procedimiento sancionatorio que se adelanta en contra de la señora BEATRIZ ELENA GARCES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.495.316, en su calidad de Representante Legal de la **COORPORACIÓN C&B SERVICIOS EMPRESARIALES** con No. de ESAL 21-015094-22 y NIT 900.630.362-9.

ARTÍCULO TERCERO: SE ADVIERTE a la representante legal de la **COORPORACIÓN C&B SERVICIOS EMPRESARIALES** con No. de ESAL 21-014983-21 y NIT 900612097-5, que deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones consagradas en el parágrafo del artículo 12 del Decreto 427 del 5 de marzo de 1996, artículo 1° del Decreto 1093 de 1989, artículo 45 de la Ley 190 de 1995, Decreto 2649 de 1993, Ley 222 de 1995, Circular No. 000194 del 6 de mayo de 2014 y las demás que rigen la materia, remitiendo anualmente los documentos que soportan la información administrativa, financiera y contable al Gobernador para efectos de la inspección y vigilancia.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la señora BEATRIZ ELENA GARCES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 43.495.316, en su calidad de Representante Legal de la **COORPORACIÓN C&B SERVICIOS EMPRESARIALES**, o a quien legalmente haga sus veces, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 2011 artículo 67)


ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de

Reposición de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso.

ARTICULO SEXTO: Publíquese la presente Resolución en la Gaceta Departamental, cumplido este requisito surte sus efectos legales.

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


M) SERGIO FAJARDO VALDERRAMA b1
Gobernador de Antioquia


ERIKA TATIANA SANCHEZ GOMEZ
Directora de Asesoría Legal y de Control

**EN ANTIOQUIA
NO SE PIERDE
UN PESO.**



**IMPRENTA DPTAL.
DE ANTIOQUIA**

La presente edición de la Gaceta Departamental
fue digitalizada e impresa con papel reutilizable
en los talleres gráficos de la Imprenta Departamental de Antioquia,
en el mes de octubre del año 2014.

Carrera 48 N° 58 - 11 (Ecuador con la Oriental)
(57+4) 291 1111 - 291 1113 - 284 4025 - Fax: 291 1112
Medellín - Antioquia - Colombia

www.antioquia.gov.co
imprensa@antioquia.gov.co



***"Cada hoja de papel es un árbol...
PROTEJAMOS la naturaleza
y racionalicemos su uso".***
